



Secreto Fiscal en la Quiebra

Análisis del equilibrio entre confidencialidad tributaria y transparencia en procesos concursales

Gabriela Fernanda Boquin

Introducción: ¿Qué es el secreto fiscal?

Protección Legal

Resguardo jurídico de la información tributaria de los contribuyentes frente a terceros no autorizados

Base Normativa

Fundamento en el Artículo 101 de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal

Objetivo Principal

Preservar la confidencialidad y evitar usos indebidos de información sensible del contribuyente



Marco legal aplicable en Argentina



Ley 11.683

***Ley de Procedimiento Fiscal -
Artículo 101 establece el
régimen de secreto fiscal y
excepciones contempladas
para autoridades judiciales.***



Ley 24.522

***Ley de Concursos y Quiebras -
Define facultades
investigativas y
administrativas del síndico
en procesos concursales.***



¿El derecho a la información debe ceder ante el secreto fiscal?

No.

Existe una jerarquía clara de derechos en nuestra Constitución y leyes. El Derecho a la Información Pública, al ser un derecho fundamental, se posiciona en un nivel superior y no debe ser subordinado a normativas de menor jerarquía o excepciones que deben interpretarse de forma restrictiva.



¿Es una regla de información tributaria de los contribuyentes o una excepción al derecho de acceso a la información pública?



1

Regla

Desde la sanción de la ley 27275 la transparencia rige como regla

2

Excepción

mientras la opacidad- el secreto es su excepción

Ver <https://www.revistaanfibia.com/el-secreto-fiscal-es-intocable/> María Eugenia Marano

CSJN CIPPEC c/EN Ministerio de Desarrollo Social 26/3/2014

Derecho a buscar y recibir información fue consagrado por la Declaración Americana de derechos y deberes del hombre (art.IV) y por el art. 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Se debe demostrar interés directo pues hay una restricción (art. 13 de la Convención)

Pero...art. 101 reformado en el 2017 por la ley 27430 dice :

La información amparada por el secreto fiscal contenido en este artículo se encuentra excluida del derecho de acceso a la información pública en los términos de la ley 27.275 y de las leyes que la modifiquen, sustituyan o reemplacen.



Ley 25326: Protección de Datos Personales y Secreto Fiscal



Protección de Datos Personales

Garantiza el derecho de los individuos a la privacidad y el control sobre su información personal, limitando su uso y divulgación conforme a los principios de legalidad, finalidad, calidad, seguridad y confidencialidad.

La Ley 25.326 y el secreto fiscal están intrínsecamente relacionados, ya que los datos fiscales son datos personales sensibles. La LPDP refuerza la confidencialidad establecida por el secreto fiscal (Art. 101, Ley 11.683), asegurando la protección de la información tributaria como parte del derecho fundamental a la privacidad.



El Secreto Fiscal

Resguarda la información económica y tributaria de los contribuyentes, considerándola confidencial y de acceso restringido, estableciendo excepciones estrictas para su revelación.

Ley 25.326: Requisitos y Excepciones del Consentimiento para el Tratamiento de Datos Personales

Los artículos 5.1 y 5.2 de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) son fundamentales, ya que establecen los criterios para el consentimiento necesario en el tratamiento de datos personales, delineando tanto la regla general como sus excepciones específicas.

Artículo 5.1: El Consentimiento Informado como Regla General

La normativa establece que el tratamiento de datos personales es lícito únicamente si se cuenta con el consentimiento libre, expreso e informado de su titular.

Artículo 5.2: Excepciones al Consentimiento Informado

El consentimiento del titular de los datos no será necesario cuando:

- *Se recolecten para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado.*
- *Se recolecten en virtud de una obligación legal.*

¿Quién está legitimado para solicitar el levantamiento?



1 La sindicatura

Como representante legal del proceso concursal, tiene facultades para solicitar acceso a información tributaria del deudor y terceros vinculados cuando resulte necesario para cumplir sus funciones.

2 El Acreedor

Puede requerir el levantamiento cuando demuestre interés legítimo y fundado en acceder a información fiscal relevante para proteger sus derechos en el proceso.

¿Puede ordenarlo el juez de oficio? SI

Un rol activo como director del proceso

En el proceso concursal, el juez no se limita a resolver las cuestiones que le son planteadas. Adopta un papel activo e inquisitivo, facultado para investigar y ordenar medidas de oficio cuando sea necesario.

- ***A diferencia de un juez tradicional, el juez concursal tiene la capacidad de tomar un papel proactivo en la gestión del concurso, garantizando la eficacia y el buen desarrollo del procedimiento, incluso ordenando el levantamiento del secreto fiscal si lo considera pertinente.***





La quiebra y el rol del síndico

1

Función del Síndico

Encargado de investigar exhaustivamente y administrar el patrimonio del fallido.

Legitimado principal de las acciones de recomposición patrimonial

2

Facultades Amplias

Acceso irrestricto a libros contables, documentos comerciales, registros bancarios y realización de compulsas en establecimientos del deudor para verificar activos.

3

Necesidad de Información

Requiere datos tributarios completos para evaluar la situación patrimonial real, detectar irregularidades y lograr la recomposición efectiva de activos disponibles.

Conflicto entre secreto fiscal y funciones del síndico

1

Vinculación CUIT

El síndico debe vincular el CUIT del fallido a su clave fiscal para obtener acceso básico a declaraciones juradas y pagos impositivos históricos. Pero esto no siempre alcanza...

2

Limitación Crítica

Obstáculos cuando se requiere información de terceros vinculados (familiares, sociedades relacionadas) para detectar maniobras de vaciamiento o fraude.

3

Impacto Negativo

Reduce la transparencia del proceso y afecta la eficacia en la recuperación de activos, perjudicando los derechos de los acreedores.



Jurisprudencia y avances normativos recientes

Tendencias Judiciales

Los tribunales argentinos muestran una marcada tendencia hacia el levantamiento parcial y controlado del secreto fiscal en casos debidamente fundados, priorizando el orden público del proceso concursal.

Casos Emblemáticos

Criterios actuales consolidados en fallos de Cámaras Comerciales que equilibran derechos individuales con el interés colectivo de los acreedores y la administración de justicia.





¿QUÉ ES EL FRAUDE ?



- **ART. 12 DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL**
- **Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público.**

El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir.

CCCN art. 12

- ▶ **La norma incluye los dos conceptos vinculados, casi hermanados: el orden público, al cual no define, y el fraude a ley, al que más que definirlo lo describe estableciendo claramente sus consecuencias.**
- ▶ **Con una finalidad metodológica el legislador ha incorporado ambas concepciones en la parte general introductoria para que influya en todo el ordenamiento.**

Lorenzetti

El fraude a la ley requiere la existencia de un acto jurídico aparentemente lícito porque se realiza al amparo de una ley vigente, pero que persigue la obtención del resultado análogo o equivalente al prohibido por una norma imperativa.

*Se pueden distinguir tres elementos: **a) un acto jurídico; b) una ley de cobertura; c) una ley defraudada***

La consecuencia de este acto lícito conforme a la ley produce un resultado análogo al prohibido por una ley, es decir, no hay una ilicitud directa entre el supuesto de hecho y la ley de cobertura, si se aplicara un método deductivo.

En cambio, si se efectúa una interpretación de todo el ordenamiento, conforme surge de los artículos 1° y 2° del Código, aparece que, si bien se ajusta a una ley, contradice otra imperativa.

Para llegar a esta conclusión interpretativa no es necesario indagar sobre la existencia del dolo, sino que el aspecto central es la causa fin del negocio, que resulta contraria al previsto por el ordenamiento.

En consecuencia, debe indagarse el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, y también, los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente, si son esenciales para ambas partes (art. 281

orden público concursal



Encuentra fundamento en los principios rectores que rigen la materia con las siguientes implicancias:

1. Constituyen materia indisponible para las partes,
2. Deben ser aplicados imperativamente por los jueces a la hora de resolver
3. Su evasión debe ser sancionada
4. Si esa violación fuese materializada a través del uso de un instituto legal válido deberá ser catalogada como fraude a la ley.

Principios rectores

- 1 . la colectividad,
2. universalidad,
3. oficiosidad,
4. la igualdad de tratamiento de los acreedores y su derecho de propiedad,
5. la preservación de las fuentes de trabajo, la tutela de los trabajadores y de los sujetos en condición de vulnerabilidad.

ART.159

“Casos no contemplados: reglas. En las relaciones patrimoniales no contempladas expresamente, el juez debe decidir aplicando las normas de las que sean análogas, atendiendo a la debida protección del crédito, la integridad del patrimonio del deudor y de su empresa, el estado de concurso y el interés general”.

Obsérvese que remite a principios rectores como también al **“interés general”** y con ello al orden público que lo protege.

Tres conceptos de relevancia para la temática:

1. La existencia y aplicación en la práctica de principios rectores concursales que involucren al orden público específico
2. Su interpretación e integración con la normativa conforme las disposiciones del art.2 CCCN
3. La importancia del art. 159 LCQ como regla de carácter supletorio para la interpretación vinculada al interés general.

CSJN

“El procedimiento concursal se asienta en principios de orden público que intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los afectados por la situación particular de cesación de pagos en que incurre el deudor, y a tal fin ordena el ejercicio de las pretensiones promovidas contra el mismo y su satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio para todos los acreedores, de carácter colectivo y universal, que atañe a la totalidad del patrimonio del deudor, prenda común de todos los acreedores y garantía de satisfacción de sus créditos, los que deberán insinuarse en condiciones igualitarias de reconocimiento ante el juez de la causa, y su pago ha de concretarse respetando la situación especial o particular según las disposiciones legales preestablecidas, lo que encuentra sustento en la norma básica del ordenamiento jurídico que protege el derecho de propiedad y de igualdad del conjunto de los involucrados”

CSJN, “Florio y Compañía I.C.S.A. s/conc.prev. s/incidente de verificación por Niz, Adolfo Ramón”, 15/04/2004, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, Fallos: 327:1002.

CSJN

El procedimiento establecido por la ley de concursos, consiste en la obligación del acreedor de verificar la pretensión crediticia en un trámite de naturaleza ordinaria y plena que hace cosa juzgada formal y material, donde intervienen no sólo el pretensor y el deudor, sino la sindicatura y los demás acreedores, quienes también pueden impugnar la pretensión en cuanto a su entidad y privilegio y hacerse parte en el proceso. A esos fines ha dispuesto mecanismos e institutos de carácter excepcional, que atienden a asegurar el orden público e interés general y a principios superiores que preservan la seguridad jurídica e igualdad de trato, como es el de desplazar la competencia judicial original o exclusiva otorgada a determinados tribunales en otras normas legislativas”

CSJN, “Supercanal S.A. s/ apelación IVA” (del dictamen del Procurador al que remitió la Corte), 2/06/2003, Fallos: 326:1774

Las menciones de fraude en la ley de concursos son escasas, vemos en ese sentido lo dispuesto por los artículos 50 inc. 3 y 4, 52 inc. 4, el 161 inc. 1; el 233.-

Pero claramente estos no son los únicos casos en los que puede existir un fraude a la ley.

Ocultar activos, exagerar pasivos o inventarlos para obtener la aprobación de la propuesta concordataria, sustraer el proceso de su juez natural, constituyen situaciones típicas de fraude a la ley concursal en las cuales el deudor se ajusta sólo formalmente a ella cuando en realidad, viola preceptos imperativos haciendo aquello que la norma concursal busca evitar.

La violación a la universalidad, a la composición cierta y transparente de las deudas, a la existencia de un presupuesto objetivo y a las reglas de competencia son casos en los cuales las normas imperativas son evadidas con conductas aparentemente lícitas.

Estas CONDUCTAS no solo importan una afectación a los derechos de los acreedores involucrados sino que perturban al interés general

Impacto práctico en la gestión concursal

Detección de Activos Ocultos

Las restricciones del secreto fiscal dificultan identificar bienes transferidos fraudulentamente o patrimonios no declarados en sociedades vinculadas al deudor.

Maniobras Fraudulentas

Limitaciones para descubrir operaciones de vaciamiento patrimonial, subfacturación o simulación de deudas que perjudican a los acreedores legítimos.

Retrasos Procesales

Porcentaje estimado de dilación en tramitaciones por falta de acceso a información fiscal completa

Pérdida Patrimonial

Reducción promedio del activo recuperable por demoras en la identificación de bienes

Propuestas para un equilibrio efectivo

01

Solicitud Judicial Motivada

Presentación fundada ante el juez del concurso especificando qué información se requiere y su relevancia para el proceso.

Falta de información sobre la composición del patrimonio desde la fecha de inicio de estado de cesación de pagos

02

Resolución Judicial Específica

Orden del tribunal autorizando el levantamiento parcial y determinando alcance, plazos y condiciones de acceso

03

Capacitación Profesional

Certificación del síndico en protocolos de manejo confidencial de información tributaria sensible

04



Conclusión



El secreto fiscal es un derecho del contribuyente, pero no debe convertirse en un obstáculo insalvable para la justicia concursal.

Es necesario avanzar hacia un marco normativo equilibrado que proteja la confidencialidad legítima sin impedir la investigación efectiva del síndico.

La cooperación entre organismos fiscales y tribunales resulta esencial para garantizar procesos concursales transparentes que protejan los derechos de todos los involucrados.

el secreto fiscal no puede ser una herramienta que avale el fraude, si así lo fuese sería una herramienta ilegítima